



Asamblea General

Distr. general
23 de septiembre de 2024
Español
Original: inglés

Consejo de Derechos Humanos Grupo de Trabajo sobre la Detención Arbitraria

Opiniones aprobadas por el Grupo de Trabajo sobre la Detención Arbitraria en su 100º período de sesiones, 26 a 30 de agosto de 2024

Opinión núm. 44/2024 relativa a Moath Amarneh, Abu Iram Ameer y Badr Mohammad (Israel)

1. El Grupo de Trabajo sobre la Detención Arbitraria fue establecido en virtud de la resolución 1991/42 de la Comisión de Derechos Humanos. En su resolución 1997/50, la Comisión prorrogó y aclaró el mandato del Grupo de Trabajo. Con arreglo a lo dispuesto en la resolución 60/251 de la Asamblea General y en la decisión 1/102 del Consejo de Derechos Humanos, el Consejo asumió el mandato de la Comisión. La última vez que el Consejo prorrogó el mandato del Grupo de Trabajo por tres años fue en su resolución 51/8.

2. De conformidad con sus métodos de trabajo¹, el Grupo de Trabajo transmitió el 31 de mayo de 2024 al Gobierno de Israel una comunicación relativa a Moath Amarneh, Abu Iram Ameer y Badr Mohammad. El Gobierno no ha respondido a la comunicación. El Estado es parte en el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos.

3. El Grupo de Trabajo considera arbitraria la privación de libertad en los casos siguientes:

a) Cuando es manifiestamente imposible invocar fundamento jurídico alguno que la justifique (como el mantenimiento en reclusión de una persona tras haber cumplido su condena o a pesar de una ley de amnistía que le sea aplicable) (categoría I);

b) Cuando la privación de libertad resulta del ejercicio de los derechos o libertades garantizados por los artículos 7, 13, 14, 18, 19, 20 y 21 de la Declaración Universal de Derechos Humanos y, respecto de los Estados partes, por los artículos 12, 18, 19, 21, 22, 25, 26 y 27 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos (categoría II);

c) Cuando la inobservancia, total o parcial, de las normas internacionales relativas al derecho a un juicio imparcial, establecidas en la Declaración Universal de Derechos Humanos y en los instrumentos internacionales pertinentes aceptados por los Estados interesados, es de una gravedad tal que confiere a la privación de libertad carácter arbitrario (categoría III);

d) Cuando los solicitantes de asilo, inmigrantes o refugiados son objeto de detención administrativa prolongada sin posibilidad de examen o recurso administrativo o judicial (categoría IV);

e) Cuando la privación de libertad constituye una vulneración del derecho internacional por tratarse de discriminación por motivos de nacimiento, origen nacional, étnico o social, idioma, religión, condición económica, opinión política o de otra índole,

¹ [A/HRC/36/38](#).



género, orientación sexual, discapacidad u otra condición, que lleva o puede llevar a ignorar el principio de igualdad de los seres humanos (categoría V).

1. Información recibida

a) Comunicación de la fuente

4. Moath Amarneh nació el 21 de agosto de 1987. Es periodista, fotógrafo y cámara palestino de J-Media. Reside habitualmente en el campo de refugiados de Dheisheh, Belén, Ribera Occidental.

5. Abu Iram Ameer nació el 22 de septiembre de 1991. Es periodista, reportero y cámara palestino del sitio web palestino de noticias Al Ersal Network. Reside habitualmente en Birzeit, al norte de Ramala, Ribera Occidental.

6. Badr Mohammad nació el 13 de diciembre de 1988. Es periodista, reportero y columnista palestino del sitio web palestino Al-Hadath. También ha colaborado con artículos sobre la situación de los presos palestinos en sitios web de noticias como Quds News Network y Metras. Reside habitualmente en Beit Liqya, Ramala, Ribera Occidental.

i) Contexto

7. Según la fuente, el recurso a la detención administrativa ha alcanzado su punto máximo en el contexto de la situación en los Territorios Palestinos Ocupados y en Israel, y miles de civiles palestinos están detenidos. La fuente sostiene que el recurso a la detención administrativa alcanzó en 2023 su nivel más alto en 30 años y, al parecer, ha seguido aumentando desde el 7 de octubre de 2023.

8. La fuente afirma que el ejército israelí está autorizado a dictar órdenes de detención administrativa contra civiles palestinos en aplicación de la Orden Militar núm. 1651, introducida por primera vez en 1970. El artículo 285, en vigor desde 2010, faculta a los mandos militares para detener a una persona durante períodos renovables de hasta seis meses si tienen motivos razonables para presumir que la seguridad regional o la seguridad pública exigen la detención. Cabe señalar que las órdenes de detención se renuevan con frecuencia en la fecha de su expiración o justo antes. Este proceso puede prolongarse indefinidamente, ya que no hay límite para la duración máxima de la detención administrativa.

9. Al parecer, alrededor del 80 % del número total de detenciones practicadas por las autoridades israelíes desde el 7 de octubre de 2023 han dado lugar efectivamente a una detención administrativa indefinida, como indicaron numerosos titulares de mandatos de procedimientos especiales de las Naciones Unidas en una comunicación al Gobierno de Israel².

10. Supuestamente, las situaciones de las tres personas objeto del presente caso son representativas de una pauta más amplia de uso de la detención administrativa por parte de las Fuerzas de Defensa de Israel para detener sin cargos a periodistas en la Ribera Occidental. Al parecer, esta pauta se ha generalizado significativamente desde el 7 de octubre de 2023 y coincide con la identificada por cinco relatores especiales el 1 de febrero de 2024³.

11. Según la fuente, los casos de los Sres. Amarneh, Ameer y Mohammad proporcionan una imagen global de la persecución sistemática de periodistas en Ribera Occidental. Las tres personas tienen en común que son periodistas palestinos que fueron detenidos en sus domicilios de la Ribera Occidental durante las tres semanas posteriores al 7 de octubre de 2023. Todos ellos son periodistas que han publicado información crítica con las Fuerzas de Defensa de Israel, con Israel o con ambos. Desde su detención, ninguno de ellos ha sido acusado y a todos se les ha negado el acceso a un juicio imparcial y la comunicación con sus familiares.

² Véase la comunicación ISR 9/2023, disponible en <https://spcommreports.ohchr.org/TMResultsBase/DownloadPublicCommunicationFile?gId=28609>.

³ Véase <https://www.ohchr.org/en/press-releases/2024/02/gaza-un-experts-condemn-killing-and-silencing-journalists>.

12. La fuente afirma que el Gobierno de Israel está deteniendo a civiles y periodistas palestinos en la Ribera Occidental como medio de silenciar a la oposición y a quienes tienen opiniones críticas con el Gobierno.

13. Además, los abogados que representaron a los Sres. Amarneh, Ameer y Mohammad fueron designados por la Comisión de Asuntos de los Detenidos, que es de hecho un servicio de asistencia letrada administrado por la Autoridad Palestina. Como solo hay cuatro abogados asignados a trabajar en casos de detención administrativa, cada abogado tiene una carga de trabajo de aproximadamente 900 casos. Por lo tanto, su capacidad para documentar exhaustivamente todos los detalles de los casos se ve gravemente obstaculizada.

14. La función principal de los abogados de la Comisión de Asuntos de los Detenidos es informar a las familias sobre las sentencias. Solo en casos excepcionales impugnan decisiones judiciales. Según la fuente, esto se debe a que a los abogados se les niega sistemáticamente el acceso a las pruebas por motivos de seguridad, a que las apelaciones tienen un éxito limitado, y a que aun en el caso de que el Tribunal Supremo de Israel exija la puesta en libertad de un detenido, es posible que éste vuelva a ser de nuevo detenido. Además, el coste de contratar a un abogado privado es relativamente elevado en comparación con los bajos niveles de renta en la Ribera Occidental, lo que obliga a las familias a depender de los abogados de la Comisión. En este contexto, y dada la situación que se vive en los Territorios Palestinos Ocupados y en Israel, obtener información sobre casos concretos resulta al parecer difícil: o no se conoce la información, o los abogados no la han documentado, o no es posible ponerse en contacto con los abogados.

ii) *Detención y reclusión del Sr. Amarneh*

15. La fuente informa de que el 16 de octubre de 2023, a las 03.30 horas, 12 soldados israelíes asaltaron el domicilio del Sr. Amarneh y lo esposaron. Uno de los soldados obligó a continuación al Sr. Amarneh a hablar por teléfono con un oficial, que le preguntó por la naturaleza de su trabajo. Cuando el Sr. Amarneh respondió que era periodista, el oficial le informó de que estaba detenido por incitación. Los soldados se apoderaron entonces de su teléfono móvil y lo detuvieron. Después, según los informes, le vendaron los ojos, lo agredieron verbalmente, le dieron patadas y lo sacaron de la casa para meterlo en un vehículo de las Fuerzas de Defensa de Israel. Fue llevado a la prisión de Megiddo.

16. El día de la detención del Sr. Amarneh, las Fuerzas de Defensa de Israel ordenaron el cierre de la agencia J-Media, donde trabajaba el Sr. Amarneh. En un comunicado, las Fuerzas de Defensa de Israel calificaron a la agencia J-Media de organización ilegal y afirmaron que su cierre era necesario para la seguridad de Israel, la seguridad de la población y el orden público.

17. La fuente alega que el Sr. Amarneh fue detenido en represalia por sus comentarios en las redes sociales sobre la situación actual en los Territorios Palestinos Ocupados y en Israel. Al parecer, en los días previos a su detención el Sr. Amarneh publicó en su cuenta personal en las redes sociales, que tiene 22.000 seguidores, comentarios sobre la situación en los Territorios Palestinos Ocupados e Israel. Incluyó vídeos sobre bombardeos en Gaza y niños desplazados y heridos, así como una foto de su colega de J-Media que había sido detenido por las fuerzas israelíes el 15 de octubre de 2023.

18. Dos semanas después de su detención, el 29 de octubre de 2023, el Tribunal Militar de Israel confirmó la detención administrativa durante seis meses del Sr. Amarneh, ordenada previamente por el Comandante Militar. Sin embargo, no se ha emitido ningún pliego de cargos en su caso. La fuente señala que estas vistas no son juicios y que los acusados no pueden defenderse, especialmente porque no se presentan contra ellos cargos ni acusaciones en el marco de la detención administrativa. Además, debido a la situación actual en los Territorios Palestinos Ocupados y en Israel, algunas audiencias se han celebrado por videollamada.

19. La fuente señala que se ha permitido al Sr. Amarneh tener acceso a un abogado y que su abogado ha podido visitarle. Sin embargo, se desconoce si el Sr. Amarneh fue interrogado y, de ser así, si su abogado estaba presente en ese momento.

20. El 10 de noviembre de 2023, el Sr. Amarneh fue golpeado por unos funcionarios de prisiones israelíes que le rompieron las gafas después de que les dijera que tenía dolores de cabeza persistentes debido a que había perdido un ojo y a una herida en la cabeza que sufrió en 2019. Como resultado de las palizas de los funcionarios de prisiones israelíes, el Sr. Amarneh sufrió otra lesión en la cabeza, que ha agravado sus dolores de cabeza y sus problemas de visión. Las autoridades israelíes se han negado a llevarlo a un hospital para que reciba el tratamiento que necesita para sus dolores de cabeza y la diabetes que también padece. Además, según se ha informado la celda del Sr. Amarneh está abarrotada y se ve obligado a dormir en el suelo sin mantas, a pesar del frío.

21. Al parecer, el Sr. Amarneh compareció ante el Tribunal Militar por primera vez en febrero de 2024. Ese mismo mes, su abogado recurrió la decisión de seis meses de detención administrativa, y pidió su puesta en libertad por motivos médicos. En respuesta, el Tribunal Militar redujo el período de detención administrativa a cuatro meses y tres semanas. Sin embargo, esa decisión no cambió la situación del Sr. Amarneh, ya que las órdenes de detención administrativa se renuevan automáticamente.

22. El 10 de marzo de 2024 la detención administrativa del Sr. Amarneh se prorrogó otros seis meses. Al parecer, su abogado recurrió esa decisión y el Sr. Amarneh está actualmente a la espera de la vista ante el Tribunal Supremo, que probablemente tendrá lugar a principios de junio de 2024.

23. La fuente informa de que no se ha permitido a la familia del Sr. Amarneh visitarlo desde que fue detenido.

24. El 18 de abril de 2024 el Sr. Amarneh fue trasladado a la prisión de Ktziot, en Negev. El Sr. Amarneh y otros detenidos tienen las manos y las piernas hinchadas por estar esposados todo el tiempo. El Sr. Amarneh sufre sobre todo hinchazón en la pierna derecha, debido a que lo mantuvieron atado durante el largo viaje en autobús mientras era trasladado de la prisión de Megiddo a la de Ktziot.

25. La fuente afirma que en la prisión de Ktziot, la cantidad y la calidad de los alimentos son deficientes y que, durante el verano, el Sr. Amarneh y otros detenidos se habían visto obligados a llevar ropa de invierno, mientras que durante el invierno anterior se les obligó a llevar ropa de verano.

iii) *Detención y reclusión del Sr. Ameer*

26. La fuente afirma que el 5 de noviembre de 2023, a las 05.20 horas, agentes de las Fuerzas de Defensa de Israel allanaron el domicilio del Sr. Ameer en Birzeit, al norte de Ramallah, y lo detuvieron. Al parecer, al Sr. Ameer no se le notificaron los cargos que se le imputaban ni los motivos de su detención, ni se le mostró una orden de detención.

27. Los agentes de las Fuerzas de Defensa de Israel pidieron al Sr. Ameer sus documentos de identidad en el momento de la detención y confiscaron su teléfono móvil. No emplearon la fuerza contra él, pero cuando pidió permiso para despedirse de sus familiares antes de que se lo llevaran, los soldados se lo denegaron. Luego le vendaron los ojos y fue conducido a un vehículo militar por unos nueve soldados armados. En ese momento, los soldados de las Fuerzas de Defensa de Israel le dijeron al Sr. Ameer que su carrera periodística había terminado. Posteriormente fue interrogado en la calle, entre otras cosas sobre su cuenta en las redes sociales, y acusado de incitación durante su trabajo periodístico.

28. Inmediatamente después de su detención, el Sr. Ameer fue trasladado a una base militar y estuvo esposado durante seis horas. Luego lo trasladaron a un campo del ejército en el sur de la Ribera Occidental, donde permaneció durante dos días, tras lo cual lo trasladaron a la prisión de Ofer.

29. La fuente informa de que el Sr. Ameer estuvo esposado durante un largo período de tiempo, incluso dentro de la prisión, lo que provocó que se le hincharan gravemente las manos. Se afirma que el Sr. Ameer fue interrogado sin la presencia de un abogado.

30. Al parecer, una vez en la prisión de Ofer, el Sr. Ameer fue llevado a la oficina de la policía, donde fue golpeado y agredido verbalmente. Ya se había preparado un documento impreso con entre 20 y 30 preguntas en hebreo, a todas las cuales ya se había respondido con

la palabra “no”. Al Sr. Ameer se le dijo que el documento era su declaración, que no había necesidad de investigar más y que podía firmarlo e irse.

31. El 12 de noviembre de 2023 el Sr. Ameer compareció por primera vez ante el Tribunal Militar israelí mediante una breve videoconferencia. Al parecer, no se le permitió hablar; la conversación sobre su trabajo periodístico se mantuvo entre su abogado y los oficiales del Tribunal Militar. Durante la vista, no se demostró al parecer la existencia de ninguna conexión entre el Sr. Ameer y una organización política o de cualquier otro tipo, y no se presentaron pruebas de incitación. El Fiscal Militar se refirió a la existencia de un “expediente secreto”. El Tribunal Militar acordó reducir la orden de detención de seis a tres meses, ya que no había pruebas de que el Sr. Ameer fuese culpable de incitación ni pruebas de que perteneciera a ninguna organización palestina.

32. El 19 de noviembre de 2023 el Fiscal Militar apeló para que se restableciera la orden de detención de seis meses y el abogado del Sr. Ameer apeló para que se mantuviera en tres meses. Al parecer, ese mismo día se celebró una segunda vista, durante la cual se permitió al Sr. Ameer hablar y explicar su trabajo periodístico. El Tribunal Militar confirmó la orden de detención administrativa de tres meses. El abogado del Sr. Ameer recurrió ante el Tribunal Supremo, que acordó liberar al Sr. Ameer una vez transcurridos un total de seis meses desde el momento de su detención, fijando así su fecha de liberación para el 3 de mayo de 2024.

33. Desde el momento de su detención, al Sr. Ameer no se le permitió ver a su familia, ya que no se permite que los familiares visiten a los detenidos o se comuniquen con ellos. Además, no pudo comunicarse con su abogado, salvo el 29 de noviembre de 2023 y el 25 de febrero de 2024.

34. La fuente señala que las autoridades israelíes dijeron al Sr. Ameer que había sido detenido por su labor periodística, sin dar más detalles sobre los motivos oficiales de la detención. Como periodista, el Sr. Ameer ha cubierto las detenciones de jóvenes manifestantes palestinos, la liberación de activistas palestinos encarcelados y el acoso a palestinos por parte de las autoridades israelíes. En 2023, cubrió una incursión militar israelí en Yenín, donde, al parecer, las Fuerzas de Defensa de Israel habían dado muerte en mayo de 2022 a un conocido periodista palestino-estadounidense. El Sr. Ameer publicó en su cuenta personal de las redes sociales críticas contra las fuerzas israelíes.

35. A finales de 2017, cuando el Sr. Ameer trabajaba como reportero para el canal de televisión Al-Aqsa, fue detenido durante varias semanas por su labor periodística. El Gobierno de Israel prohibió Al-Aqsa en 2018.

36. El 17 de febrero de 2024, el Sr. Ameer y otros detenidos fueron agredidos violentamente. Además, el 29 de marzo de 2024, soldados israelíes entraron al parecer en la celda ocupada por el Sr. Ameer y otros detenidos mientras dormían. Los soldados iban acompañados de un perro y golpearon a los detenidos, incluido el Sr. Ameer.

iv) Detención y reclusión del Sr. Mohammad

37. La fuente afirma que en octubre de 2023, el Sr. Mohammad recibió una llamada telefónica de un oficial militar israelí, que ordenó que volviera a ser detenido después de haber sido puesto en libertad tras una detención de cuatro meses a principios de 2023. La orden se dictó a pesar de que no había cargos pendientes contra el Sr. Mohammad.

38. Al parecer, agentes de las Fuerzas de Defensa de Israel y de la Agencia de Seguridad de Israel (Shin Bet) se personaron tres veces en el domicilio del Sr. Mohammad para detenerlo. Sin embargo, no se encontraba en casa en ninguna de esas ocasiones. El primer intento se produjo el 19 de octubre de 2023 a las 03.00 horas. El segundo intento se produjo el 22 de octubre de 2023 entre las 03.00 y las 04.00 horas, durante el cual fueron detenidos tres miembros de la familia del Sr. Mohammad.

39. El tercer intento se produjo el 27 de octubre de 2023, durante el cual agentes de las Fuerzas de Defensa de Israel registraron y causaron daños en la casa del Sr. Mohammad, incluidos sus muebles, y se incautaron de sus dispositivos electrónicos.

40. En cada una de esas visitas, los agentes de las Fuerzas de Defensa de Israel dijeron a los familiares del Sr. Mohammad que tenía que comparecer para ser interrogado, pero no les

dieron ninguna explicación. Además, según los informes, los familiares del Sr. Mohammad recibieron llamadas telefónicas en las que se les decía que no le ayudaran a esconderse.

41. Según la fuente, al día siguiente, 28 de octubre de 2023, agentes de las Fuerzas de Defensa de Israel detuvieron a un cuarto miembro de la familia del Sr. Mohammad, que trabaja como periodista para Al-Hadath, el mismo sitio web palestino para el que trabaja el Sr. Mohammad. Ese mismo día, aproximadamente a las 16.00 horas, tras la detención de su familiar, el Sr. Mohammad se presentó en las puertas de la prisión de Ofer, en la Ribera Occidental, y se entregó. Fue detenido inmediatamente por las Fuerzas de Defensa de Israel y la Agencia de Seguridad Israelí. Según se informa, no se le mostró una orden de detención ni se le explicaron los motivos de ésta.

42. Cuando el Sr. Mohammad se entregó en la prisión de Ofer el 28 de octubre de 2023, el miembro de su familia que había sido detenido ese mismo día fue puesto en libertad. Al parecer, el Sr. Mohammad fue interrogado sin la presencia de un abogado.

43. El 7 de noviembre de 2023 el Comandante Militar ordenó la detención administrativa del Sr. Mohammad durante seis meses. El 11 de noviembre de 2023 compareció por primera vez ante el Tribunal Militar, por videoconferencia. Según se informa, dos de los familiares del Sr. Mohammad han sido puestos en libertad, mientras que uno permanece detenido.

44. Supuestamente, ni la familia del Sr. Mohammad ni su abogado pudieron visitarlo en la prisión de Ofer.

45. El Sr. Mohammad ha sido sometido al parecer a graves torturas. Supuestamente, el 4 de diciembre de 2023, recibió una fuerte paliza. Como consecuencia, se le ha entumecido la mano izquierda y no puede dormir por la noche debido al dolor de espalda. Además, tiene dificultad para respirar por haber sido rociado cuatro veces con un gas no identificado en un espacio muy reducido y cerrado. La fuente señala las malas condiciones de detención del Sr. Mohammad, que incluyen la provisión de mantas sucias y de comida insuficiente.

46. El 20 de marzo de 2024 el Sr. Mohammad fue trasladado a la prisión de Ktziot, en el sur de Israel, donde actualmente se encuentra recluso y no se le ha permitido recibir visitas. Supuestamente, la única comunicación entre el Sr. Mohammad y su abogado se produjo durante una visita el 21 de marzo de 2024, que fue difícil de organizar al haber sido retrasada en múltiples ocasiones por las autoridades israelíes. La visita solo se produjo después de que la familia del Sr. Mohammad formulara una petición en la que expresaban su preocupación por su estado de salud.

47. Se presentó un recurso contra la orden de detención administrativa del Sr. Mohammad, que fue desestimado y su detención administrativa se prorrogó cuatro meses.

v) *Análisis jurídico*

48. La fuente alega que la detención y reclusión de los Sres. Amarneh, Ameer y Mohammad son arbitrarias y se inscriben en las categorías I, II, III y V de los métodos de trabajo del Grupo de Trabajo.

a) *Categoría I*

49. La fuente recuerda que, en virtud del artículo 9, párrafo 1, del Pacto, nadie podrá ser privado de libertad, salvo por las causas fijadas por ley y con arreglo al procedimiento establecido en ésta. El artículo 9, párrafo 2, del Pacto establece que toda persona detenida debe ser informada, en el momento de la detención, de las razones de ésta, así como de la acusación formulada contra ella. Esos derechos se confirman a la vista del artículo 9 de la Declaración Universal de Derechos Humanos.

50. La fuente sostiene que cuando las Fuerzas de Defensa de Israel detuvieron a los Sres. Amarneh, Ameer y Mohammad no mostraron una orden de detención ni ninguna otra decisión de una autoridad pública y no facilitaron los motivos legales de las detenciones en el momento de proceder a ellas. Estas personas han sido detenidas en aplicación de órdenes de detención administrativa, pero se ha informado de que en ninguno de los casos se ha presentado un pliego de cargos ni se ha comunicado oralmente una acusación. En las órdenes

militares se aduce el hecho de “poner en peligro la seguridad de la región” como motivo de su detención administrativa.

51. La fuente recuerda que el Grupo de Trabajo ha manifestado anteriormente su acuerdo con la opinión expresadas por el Comité de Derechos Humanos en su observación general núm. 35 (2014), de que la detención administrativa presenta un gran riesgo de privación arbitraria de la libertad (párr. 15)⁴. Además, recuerda que el Grupo de Trabajo ha constatado anteriormente violaciones similares de los procedimientos de detención por parte de las autoridades israelíes⁵.

52. Según la fuente, las autoridades israelíes no han presentado pruebas de que los tres individuos supongan una “amenaza presente, directa e imperativa”⁶. Recuerda que el Comité de Derechos Humanos ha declarado que la comunicación al detenido de al menos la esencia de las pruebas en que se basa la decisión de dictar una orden de detención administrativa es necesaria para garantizar el cumplimiento de los requisitos del artículo 9 del Pacto⁷. Sostiene que esto no ha ocurrido en el presente caso.

53. La fuente también recuerda las observaciones finales del Comité de Derechos Humanos sobre el cuarto informe periódico de Israel, publicadas en 2014, en las que el Comité pedía al Estado parte que “ponga fin a la práctica de la detención administrativa y al uso de pruebas secretas en esos procedimientos y vele por que las personas objeto de órdenes de detención administrativa sean acusadas de un delito penal, o puestas en libertad sin demora”⁸. Durante el examen de Israel en el marco del examen periódico universal, celebrado en 2023, varios Estados miembros formularon recomendaciones relativas a la detención administrativa, centradas en reducir al mínimo su uso y garantizar que, siempre que se utilizase, se hiciera de conformidad con las normas internacionales de derechos humanos⁹.

54. Además, la fuente sostiene que los Sres. Amarneh, Ameer y Mohammad no han comparecido ante una autoridad judicial, ya que fueron condenados a detención administrativa por el Tribunal Militar, en cumplimiento de las órdenes del Comandante Militar. Al parecer, en los casos del Sr. Amarneh y del Sr. Ameer, los abogados recurrieron ante el Tribunal Supremo.

55. Por las razones expuestas, la fuente afirma que las autoridades israelíes carecen de todo fundamento jurídico para justificar la privación de libertad de los Sres. Amarneh, Ameer y Mohammad, que equivale a una detención arbitraria que se inscribe en la categoría I.

b) Categoría II

56. La fuente afirma que la detención y posterior reclusión de los Sres. Amarneh, Ameer y Mohammad se deben a su trabajo como periodistas y, por lo tanto, se enmarcan en la categoría II.

57. La fuente informa de que esas tres personas son periodistas que examinan críticamente el comportamiento y la incidencia de las acciones de las Fuerzas de Defensa de Israel. Por ejemplo, el Sr. Ameer ha cubierto las detenciones de jóvenes manifestantes palestinos, la puesta en libertad de activistas palestinos encarcelados y el acoso a palestinos por parte de las autoridades israelíes. Además, en el verano de 2023, el Sr. Ameer cubrió una incursión militar israelí en Yenín y lo publicó en las redes sociales, expresando críticas contra las fuerzas israelíes. Asimismo, el Sr. Mohammad publicó una serie de artículos en el sitio web palestino Al-Hadath y en los sitios web de noticias Quqs News Network y Metras.

58. La fuente afirma que el Sr. Amarneh es fotógrafo y cámara de la agencia J-Media, con sede en la Ribera Occidental. Como el Sr. Amarneh es fotoperiodista, no hay reportajes específicos atribuibles a él. Sin embargo, sus publicaciones en las redes sociales inmediatamente antes de su detención ponían de relieve los ataques de las Fuerzas de Defensa

⁴ Opiniones núms. 44/2017 y 86/2017.

⁵ Opinión núm. 12/2020, párr. 23.

⁶ Comité de Derechos Humanos, Observación general núm. 35 (2014), párr. 15.

⁷ *Ibid.*

⁸ CCPR/C/ISR/CO/4, párr. 10.

⁹ A/HRC/54/16, párr. 39.

de Israel contra periodistas y los daños más amplios sufridos por la población civil después del 7 de octubre de 2023.

59. Según la fuente, al Sr. Ameer le dijeron durante la detención que lo habían detenido por su labor periodística. En el momento de la detención del Sr. Amarneh, uno de los soldados que procedían a ella le obligó a hablar por teléfono con un oficial, que le preguntó por la naturaleza de su trabajo. Al parecer, cuando el Sr. Amarneh respondió que era periodista, el agente le informó de que estaba detenido por incitación.

60. El Sr. Amarneh fue detenido el 16 de octubre de 2023, el mismo día que el Gobierno de Israel prohibió J-Media, donde trabajaba, alegando que J-Media era una organización ilegal y que su cierre se llevaba a cabo en aras de la seguridad de Israel, la seguridad de la población y el orden público. La fuente afirma que al menos otros tres periodistas que trabajaban para J-Media también fueron detenidos y mantenidos en detención administrativa en las dos semanas siguientes a la prohibición.

61. La fuente sostiene que no se han presentado pruebas que indiquen que ninguno de esas tres personas incitara directamente a la violencia o participara de otro modo en actividades delictivas o terroristas.

62. Por las razones expuestas, la fuente concluye que las tres personas fueron detenidas y posteriormente recluidas debido al ejercicio de su derecho a la libertad de expresión, en vulneración del artículo 19 del Pacto y del artículo 19 de la Declaración Universal de Derechos Humanos.

c) Categoría III

63. La fuente sostiene que la detención de los Sres. Amarneh, Ameer y Mohammad es arbitraria con arreglo a la categoría III, ya que se les ha denegado el derecho al debido proceso.

64. Afirma que, en los casos de los Sres. Amarneh, Ameer y Mohammad, se ha violado el derecho a un juicio justo, ya que se les ha mantenido en detención administrativa sin cargos, pruebas, plazo establecido o representación legal.

65. La fuente recuerda que el Grupo de Trabajo ha sostenido anteriormente que la privación de libertad de personas sobre la base de material e información confidenciales a los que no tienen acceso ni el detenido ni su abogado constituye una violación fundamental del derecho a un juicio justo, según el artículo 14 del Pacto¹⁰. En tales circunstancias, a los detenidos no se les da una oportunidad justa de defenderse, con o sin el apoyo del abogado. La fuente alega que, dado que a ninguna de las personas en el presente caso se les ha informado o mostrado ninguna de las pruebas en su contra, no se les ha dado la oportunidad de defenderse, en vulneración del principio de igualdad de medios procesales. La fuente indica que el Grupo de Trabajo ha reconocido anteriormente que toda persona privada de libertad tiene derecho a acceder a la documentación relacionada con su detención, incluida la información que pueda ayudar a la persona detenida a argumentar que su detención no es legal o que los motivos para su detención ya no existen¹¹. La fuente también señala que, aunque tal derecho no es absoluto y existen algunas justificaciones reconocidas que un gobierno puede aportar, como la seguridad nacional, en el presente caso el Gobierno de Israel no ha aportado ninguna justificación para no dar a estas tres personas acceso a toda la información de sus casos¹². La fuente afirma que esto viola el derecho de estas tres personas a un juicio imparcial y a disponer de tiempo y medios adecuados para la preparación de una defensa en condiciones de plena igualdad¹³, consagrados en los artículos 14, párrafos 1 y 3 b), del Pacto.

¹⁰ Opinión núm. 12/2020, párr. 26.

¹¹ Véanse los Principios y Directrices Básicos de las Naciones Unidas sobre los Recursos y Procedimientos relacionados con el Derecho de Toda Persona Privada de Libertad a Recurrir ante un Tribunal, en particular el principio 12 y las directrices 11 y 13.

¹² *Ibid.*, directriz 13.

¹³ Opiniones núms. 19/2005, párr. 28 b); 50/2014, párr. 77; 89/2017, párr. 56; 18/2018, párr. 53; y 78/2018, párrs. 78 y 79. Véase también la opinión núm. 70/2019.

66. Asimismo, la fuente afirma que estas tres personas no han podido impugnar efectivamente su detención y, por lo tanto, también se ha vulnerado el derecho a un recurso efectivo amparado por el artículo 8 de la Declaración Universal de Derechos Humanos y el artículo 2, párrafo 3, del Pacto.

67. Además, la fuente informa de que los tres individuos no han podido comunicarse con sus familias desde su detención y que no se les permite recibir visitas. Supuestamente, la única comunicación que las tres personas han tenido desde su detención es con sus abogados, e incluso esa comunicación es muy limitada. Según se informa, los Sres. Amarneh, Ameer y Mohammad no pueden organizar o mantener comunicaciones privadas con sus abogados y, en general, sus abogados solo pueden concertar visitas cuando se aproxima la celebración de una vista o cuando se plantean problemas legales.

68. La fuente sostiene que los abogados que representan a los Sres. Amarneh, Ameer y Mohammad tienen dificultades para documentar exhaustivamente todos los detalles de cada uno de sus casos, ya que tienen una carga de trabajo de aproximadamente 900 casos debido al número limitado de abogados designados por la Comisión de Asuntos de los Detenidos para trabajar en casos de detención administrativa. Además, se informa de que solo en casos excepcionales se recurren las decisiones del Tribunal Militar, debido a la falta de recursos y a las escasas perspectivas de que prosperen.

69. La fuente afirma que los Sres. Amarneh, Ameer y Mohammad son civiles detenidos en aplicación de la legislación militar y las órdenes del Tribunal Militar. Recuerda que el Grupo de Trabajo ha mantenido sistemáticamente la opinión de que, cualesquiera que sean los cargos, los civiles nunca deben ser juzgados por tribunales militares, ya que no pueden considerarse tribunales independientes e imparciales a efectos de juzgar a civiles¹⁴.

70. La fuente también recuerda que el Grupo de Trabajo ha señalado específicamente que “se recurre a menudo a los tribunales militares en relación con grupos políticos de la oposición, periodistas y defensores de los derechos humanos y considera que, como norma general, los tribunales militares solo deben tener competencia para juzgar a personal militar por delitos de carácter militar”¹⁵.

71. Del mismo modo, la fuente recuerda que el Comité de Derechos Humanos ha llegado a la conclusión de que el enjuiciamiento de civiles por tribunales militares debe ser excepcional, limitarse a los casos en los que el Estado parte pueda demostrar que el recurso a dichos tribunales es necesario y está justificado por motivos objetivos y serios, y en los que, por la categoría específica de los individuos y las infracciones de que se trata, los tribunales civiles no están en condiciones de realizar esos procesos¹⁶. En el presente caso, la fuente señala que las tres personas son periodistas y que no se ha aportado ninguna prueba o justificación que sugiera que su detención es necesaria o está justificada.

d) Categoría V

72. La fuente afirma que la detención y la reclusión por las autoridades israelíes de los Sres. Amarneh, Ameer y Mohammad se inscriben en la categoría V porque constituyen una discriminación basada en su origen nacional, étnico o social como palestinos.

73. La fuente afirma que el Gobierno de Israel aplica dos sistemas jurídicos distintos y desiguales en el mismo territorio. Supuestamente, las personas con ciudadanía israelí que viven en la Ribera Occidental no son sometidas a detención administrativa. Aunque la legislación militar israelí otorga a los tribunales militares autoridad para juzgar a cualquier persona de 12 años o más que se encuentre en la Ribera Occidental, los ciudadanos judíos que residen dentro de los límites de la Ribera Occidental están sujetos al marco jurídico civil israelí. La fuente afirma que esto se basa en una decisión adoptada por el Fiscal General de Israel que se remonta a la década de 1980, según la cual los ciudadanos israelíes deben ser juzgados en el sistema judicial civil israelí con arreglo a las leyes penales israelíes, aunque

¹⁴ Opiniones núm. 31/2017, párr. 27; y núm. 12/2020, párrs. 28 y 29; y [A/HRC/27/48](#), párrs. 66 a 70.

¹⁵ Opinión núm. 60/2023, párr. 67.

¹⁶ Comité de Derechos Humanos, observación general núm. 32 (2007), párr. 22.

vivan en el Territorio Palestino Ocupado y el delito se cometa allí contra residentes del Territorio Palestino Ocupado.

74. La fuente recuerda que el Grupo de Trabajo ha reconocido en otros casos que la detención administrativa sobre la base de la Orden Militar núm. 1651 se ha dirigido especialmente contra civiles palestinos y que se ha aplicado anteriormente de forma discriminatoria contra ellos¹⁷. Según la fuente, el mismo patrón está presente en el caso de los Sres. Amarneh, Ameer y Mohammad, ya que están privados de libertad sin que se hayan presentado contra ellos cargos ni pruebas de que supongan riesgo para la seguridad. En comparación, los ciudadanos israelíes tienen derecho a las protecciones procesales de un tribunal penal.

75. La fuente afirma que la detención administrativa de los Sres. Amarneh, Ameer y Mohammad forma parte del mayor recurso que se está haciendo de la detención administrativa desde el 7 de octubre de 2023. La fuente afirma que se está deteniendo y encarcelando a periodistas en un contexto más amplio de vulneraciones de la libertad de prensa y de violencia contra periodistas por parte de Israel durante el conflicto armado. La fuente afirma que, hasta el 10 de marzo de 2024, se han confirmado 95 muertes de periodistas y trabajadores de los medios de comunicación, 90 de las cuales de palestinos que fueron muertos en Gaza.

76. Según la fuente, se han documentado 17 casos de periodistas retenidos por Israel hasta el 1 de diciembre de 2023, 14 de ellos en detención administrativa. La fuente afirma que esta cifra sigue aumentando¹⁸. Esta situación es contraria al llamamiento hecho en 2020 por el Relator Especial sobre la situación de los derechos humanos en los territorios palestinos ocupados desde 1967 para que Israel ponga fin a la práctica de la detención administrativa¹⁹.

77. Además, la fuente recuerda que la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos ha constatado que, en diciembre de 2023, los servicios penitenciarios israelíes mantenían recluidos a 7.417 civiles palestinos por “cargos relacionados con la seguridad”, entre ellos 2.873 en detención administrativa sin acusación ni juicio²⁰.

78. Por todo lo expuesto, la fuente concluye que la detención y la reclusión de los Sres. Amarneh, Ameer y Mohammad se basaron en su origen palestino y, por lo tanto, son arbitrarias con arreglo a la categoría V.

b) Respuesta del Gobierno

79. El 31 de mayo de 2024 el Grupo de Trabajo transmitió las alegaciones de la fuente al Gobierno en virtud de su procedimiento ordinario de comunicaciones, y solicitó que se les diera respuesta a más tardar el 30 de julio de 2024. El Grupo de Trabajo lamenta que el Gobierno no haya respondido a la comunicación en el plazo establecido, y que tampoco haya solicitado una prórroga, conforme a lo dispuesto en el párrafo 16 de los métodos de trabajo del Grupo.

2. Deliberaciones

80. Para determinar si la privación de libertad de los Sres. Amarneh, Ameer y Mohammad fue arbitraria, el Grupo de Trabajo tiene en cuenta los principios establecidos en su jurisprudencia acerca de su manera de proceder en relación con las cuestiones probatorias. Si la fuente ha presentado indicios razonables de una vulneración de los requisitos internacionales constitutiva de detención arbitraria, debe entenderse que la carga de la prueba recae en el Gobierno en caso de que desee refutar las alegaciones²¹. En el presente caso, el

¹⁷ Opinión núm. 60/2023, párr. 72.

¹⁸ Véase <https://www.ohchr.org/sites/default/files/documents/countries/palestine/2023-12-27-Flash-Report.pdf>.

¹⁹ Véase <https://www.ohchr.org/en/press-releases/2020/10/un-expert-calls-israel-end-practice-administrative-detention-and-immediately>.

²⁰ Véase <https://www.ohchr.org/sites/default/files/documents/countries/palestine/2023-12-27-Flash-Report.pdf>, pág. 5, nota 1.

²¹ A/HRC/19/57, párr. 68.

Gobierno ha optado por no impugnar las alegaciones, en principio fiables, formuladas por la fuente. Ante la falta de respuesta del Gobierno, el Grupo de Trabajo ha decidido emitir la presente opinión, de conformidad con el párrafo 15 de sus métodos de trabajo.

81. Como cuestión preliminar, el Grupo de Trabajo observa que el 2 de mayo de 2024 se puso fin a la detención administrativa del Sr. Ameer y que éste perdió 32 kg durante su detención. El 9 de julio de 2024 se puso fin a la detención administrativa del Sr. Amarneh. El Sr. Mohammad sigue detenido. De conformidad con sus métodos de trabajo, no obstante la puesta en libertad de la persona en cuestión, el Grupo de Trabajo se reserva el derecho de emitir una opinión, atendiendo a las circunstancias de cada caso, sobre el carácter arbitrario o no de la privación de libertad²². En el presente caso, el Grupo de Trabajo opina que las alegaciones formuladas por la fuente son extremadamente graves y señala que el caso sigue en curso y que no ha recibido información sobre las condiciones de la puesta en libertad de los Sres. Amarneh y Ameer. Por lo tanto, el Grupo de Trabajo procederá a emitir una opinión.

82. La fuente ha afirmado que la detención de las tres personas fue arbitraria y se inscribe en las categorías I, II, III y V. El Grupo de Trabajo examinará esas categorías de manera sucesiva.

a) Categoría I

83. La fuente sostiene, y el Gobierno no lo ha rebatido, que cuando las Fuerzas de Defensa de Israel detuvieron a cada una de estas tres personas, no mostraron una orden de detención ni ninguna otra decisión de una autoridad pública y no facilitaron en el momento de la detención los motivos legales por los que se procedía a ella. Cada una de las personas fue detenida en aplicación de órdenes de detención administrativa, pero al parecer no se presentó un pliego de cargos ni se ha comunicado oralmente una acusación. El motivo de su detención administrativa, como se indica en las órdenes militares, es el hecho de “poner en peligro la seguridad de la región”.

84. De conformidad con el artículo 9, párrafo 1, del Pacto, nadie podrá ser privado de libertad, salvo por las causas fijadas por ley y con arreglo al procedimiento establecido en ésta. El artículo 9, párrafo 2, del Pacto establece que toda persona detenida debe ser informada, en el momento de la detención, de las razones de ésta, así como de la acusación formulada contra ella. Como ya ha señalado en otras ocasiones el Grupo de Trabajo, para que la privación de libertad tenga fundamento jurídico no basta con que exista una ley que autorice la detención. Las autoridades deben invocar ese fundamento jurídico y aplicarlo a las circunstancias del caso²³. Esto generalmente se hace a través de una orden de detención o de arresto (o un documento equivalente)²⁴. Las razones de la detención deberán comunicarse inmediatamente después de la detención y deberán incluir no solo el fundamento jurídico general de la privación de libertad, sino también suficientes elementos de hecho que sirvan de base a la denuncia, como el acto ilícito cometido y la identidad de la presunta víctima²⁵.

85. El Grupo de Trabajo observa las alegaciones de la fuente, que no han sido refutadas por el Gobierno, de que a los Sres. Amarneh, Ameer y Mohammad no se les presentó una orden de detención en el momento del arresto y que, en los casos de los Sres. Amarneh and Ameer, las autoridades solo les dijeron que habían sido detenidos por incitación, sin más detalles. Sobre la base de la información de que dispone en el presente caso, y a falta de una explicación del Gobierno, el Grupo de Trabajo opina que a estas tres personas no se les presentaron órdenes de detención ni se les comunicaron los motivos de la detención, en el momento de su detención, en contravención del artículo 9, párrafos 1 y 2 del Pacto, y del artículo 9 de la Declaración Universal de Derechos Humanos. En los casos de los Sres. Amarneh y Ameer, las autoridades se limitaron a decirles que se les detenía por incitación después de que declararan que trabajaban como periodistas.

²² A/HRC/36/38, párr. 17 a).

²³ Opiniones núm. 9/2019, párr. 29; núm. 46/2019, párr. 51; y núm. 59/2019, párr. 46.

²⁴ Opiniones núm. 88/2017, párr. 27; 3/2018, párr. 43; y 30/2018, párr. 39. En casos de detenciones realizadas en flagrante delito, generalmente no es posible obtener una orden judicial.

²⁵ Comité de Derechos Humanos, observación general núm. 35 (2014), párr. 25; opinión núm. 30/2017, párrs. 58 y 59. y opinión núm. 85/2021, párr. 69.

86. Además, el Grupo de Trabajo toma nota de las alegaciones no refutadas de la fuente de que los tres periodistas fueron mantenidos en detención administrativa sin ser informados de ningún cargo o acusación contra ellos. De conformidad con el artículo 9, párrafo 2, del Pacto, toda persona detenida debe ser informada sin demora de la acusación formulada contra ella. El derecho a ser informado con prontitud de los cargos se refiere a la notificación de cargos penales y, como señaló el Comité de Derechos Humanos, este derecho se aplica en relación con los procesos penales ordinarios y también en relación con los procesos militares u otros regímenes especiales en que puedan imponerse sanciones penales²⁶. Este requisito no se cumplía en el caso de los tres periodistas del presente asunto. Por tanto, el Grupo de Trabajo concluye que se ha infringido el artículo 9, párrafo 2, del Pacto.

87. El Grupo de Trabajo observa que los tres periodistas fueron sometidos a detención administrativa sobre la base de la Orden Militar núm. 1651, sin cargos ni juicio. A este respecto, el Grupo de Trabajo coincide con el Comité de Derechos Humanos en que la detención administrativa supone un gran riesgo de privación arbitraria de libertad. El Comité ha señalado que, en general, cuando existan otras medidas efectivas para hacer frente a ese riesgo, incluido el sistema de justicia penal, dicha reclusión equivale a una privación de libertad arbitraria. Si, en las circunstancias más excepcionales, se alega una amenaza presente, directa e imperativa para justificar la reclusión de personas que se considera conllevan tal riesgo, recae en el Estado la carga de la prueba de demostrar que la persona en cuestión constituye una amenaza de ese tipo y que no cabe hacer frente a esa amenaza con otras medidas; y dicha carga aumenta en la medida en que se prolonga la reclusión²⁷.

88. El Grupo de Trabajo observa que el Sr. Mohammad ha permanecido detenido desde su arresto el 28 de octubre de 2023, mientras que los Sres. Ameer y Amarneh fueron puestos en libertad el 2 de mayo de 2024 y el 9 de julio de 2024, respectivamente, sin que nunca se les notificara ningún cargo en su contra. El Gobierno de Israel no aprovechó la oportunidad que se le brindó para explicar al Grupo de Trabajo qué amenaza presente, directa e imperativa suponían esas tres personas en el momento de su detención y la manera en que esas amenazas persistieron durante su detención. Ese requisito es imperativo para garantizar el cumplimiento del artículo 9 del Pacto y asegurar la legalidad de la detención administrativa. Así pues, el Grupo de Trabajo debe concluir que no existe tal amenaza y que, por lo tanto, la detención de las tres personas carece de fundamento jurídico. Como ha declarado el Comité de Derechos Humanos, la comunicación al detenido de al menos la esencia de las pruebas en que se basa la decisión de dictar una orden de detención administrativa es necesaria para garantizar el cumplimiento de los requisitos del artículo 9 del Pacto²⁸. Por consiguiente, el Grupo de Trabajo considera que esas tres personas no tuvieron la posibilidad de impugnar efectivamente la legalidad de su detención²⁹, contrariamente a lo dispuesto en el artículo 9, párrafo 4, del Pacto. Al no proporcionarse acceso a esa información, su privación de libertad es arbitraria y se les ha denegado el derecho a un recurso efectivo en virtud del artículo 8 de la Declaración Universal de Derechos Humanos y del artículo 2, párrafo 3, del Pacto.

89. El Grupo de Trabajo concluye que la detención y la posterior reclusión de estas tres personas son arbitrarias y se inscriben en la categoría I.

b) Categoría II

90. La fuente también ha afirmado que la detención y posterior privación de libertad de estas tres personas se basan en su trabajo legítimo como periodistas y, por lo tanto, se enmarcan en la categoría II, ya que fueron detenidos y posteriormente privados de libertad

²⁶ Comité de Derechos Humanos, observación general núm. 35 (2014), párr. 29; y opinión núm. 44/2022, párr. 66.

²⁷ Comité de Derechos Humanos, observación general núm. 35 (2014), párr. 15; y opiniones núm. 13/2023 y núm. 60/2023.

²⁸ Comité de Derechos Humanos, observación general núm. 35 (2014), párr. 15; y opiniones núms. 73/2018, párr. 49; núm. 12/2020, párr. 26; y núm. 68/2022, párr. 53.

²⁹ El Grupo de Trabajo ha llegado a conclusiones similares en relación con Israel cuando la detención se basó en pruebas que no se pusieron a disposición del detenido. Véanse las opiniones núms. 44/2017, 86/2017, 34/2018, 73/2018, 12/2020 y 68/2022.

debido al ejercicio de su derecho a la libertad de expresión, en contravención del artículo 19 del Pacto y del artículo 19 de la Declaración Universal de Derechos Humanos.

91. No se ha puesto en duda que las tres personas son periodistas que han hecho un examen crítico del comportamiento de las Fuerzas de Defensa de Israel y de las repercusiones de sus acciones y han cubierto diversos aspectos de la situación en los Territorios Palestinos Ocupados y en Israel. El Grupo de Trabajo toma nota de las alegaciones no refutadas de la fuente de que el Sr. Amarneh fue detenido pocos días después de que publicara en su cuenta personal en los medios sociales información sobre la situación en el territorio palestino ocupado y en Israel, y de que las Fuerzas de Defensa de Israel al parecer ordenaron el cierre de la agencia J-Media, en la que trabajaba, calificándola en una declaración de organización ilegal e indicando que su cierre era necesario para la seguridad de Israel y para la seguridad de la población. El Grupo de Trabajo también toma nota de las alegaciones de la fuente, que no han sido rebatidas por el Gobierno, de que las autoridades que llevaron a cabo la detención del Sr. Ameer le dijeron que su carrera periodística había terminado.

92. A falta de respuesta del Gobierno de Israel, el Grupo de Trabajo está convencido de que la detención de estas tres personas se produjo como consecuencia del ejercicio de su derecho a la libertad de expresión, reconocido en el artículo 19 del Pacto y en el artículo 19 de la Declaración Universal de Derechos Humanos. Si bien el artículo 19 del Pacto establece que el derecho a la libertad de expresión podrá ser restringido en las condiciones fijadas por la ley y cuando ello sea necesario para la protección de la seguridad nacional o del orden público, no se ha demostrado que la labor de los Sres. Amarneh, Ameer o Mohammad equivaliera a incitación a la violencia. Por consiguiente, no se ha demostrado que su detención fuera necesaria y proporcionada para el objetivo legítimo de proteger la seguridad nacional o el orden público.

93. El Grupo de Trabajo concluye que la detención y la reclusión de los tres periodistas se produjeron como consecuencia del ejercicio pacífico de su derecho a la libertad de opinión y de expresión y fueron contrarias al artículo 19 de la Declaración Universal de Derechos Humanos y al artículo 19 del Pacto. Así pues, su privación de libertad es arbitraria con arreglo a la categoría II.

c) Categoría III

94. La fuente sostiene que la detención de los Sres. Amarneh, Ameer y Mohammad es arbitraria con arreglo a la categoría III, ya que se les ha denegado el derecho al debido proceso, dado que se les mantuvo en detención administrativa sin cargos, pruebas, plazo establecido o representación legal.

95. El Grupo de Trabajo observa que el presente caso se refiere a una detención administrativa que no ha conllevado acusación ni juicio en el sistema de justicia penal, y que las garantías de un juicio imparcial contempladas en el artículo 14 del Pacto normalmente no serían de aplicación en estas circunstancias. Sin embargo, como ha declarado el Comité de Derechos Humanos, debe considerarse la naturaleza de la sanción, independientemente de su calificación en el derecho interno, para determinar si las garantías de un juicio imparcial que figuran en el artículo 14 se aplican en cada caso. Las acusaciones de carácter penal corresponden en principio a actos que en el derecho penal nacional se han declarado punibles. La noción puede extenderse también a actos de naturaleza delictiva porque conllevan sanciones que, independientemente de su calificación en el derecho interno, deben considerarse penales por su objetivo, carácter o gravedad³⁰.

96. El Grupo de Trabajo ha adoptado este razonamiento en su jurisprudencia, señalando que las disposiciones del artículo 14 del Pacto sobre el derecho a un juicio imparcial son aplicables cuando las sanciones impuestas, por su objetivo, carácter o gravedad, deben considerarse penales aun cuando la detención se califique de administrativa con arreglo al derecho interno³¹. Sin esa investigación sobre la naturaleza de la sanción impuesta, los

³⁰ Comité de Derechos Humanos, observación general núm. 32 (2007), párr. 15. Véase también *Perterer c. Austria* (CCPR/C/81/D/1015/2001), párr. 9.2.

³¹ Véanse las opiniones núms. 3/2012, 20/2012, 45/2012, 58/2012, 43/2014, 31/2017, 73/2018, 12/2020, 60/2021, 61/2021, 4/2022 y 68/2022.

Estados podrían eludir efectivamente las obligaciones que les incumben en virtud del Pacto simplemente caracterizando su régimen de detención como administrativo con arreglo al derecho interno. Esto es particularmente importante en el contexto de las órdenes de detención administrativa impuestas en Israel, que parecen utilizarse como alternativa a los procesos penales, más que para prevenir una amenaza inminente, cuando no hay pruebas suficientes para inculpar y enjuiciar a una persona³².

97. En el presente caso, la detención de estas tres personas debe considerarse de carácter penal, y el Grupo de Trabajo examinará si su detención cumple los requisitos del artículo 14 del Pacto y otras disposiciones pertinentes. El Grupo de Trabajo ha considerado en otras ocasiones que, en los casos de duración excesiva de la detención, la persona debe gozar de las mismas garantías que en los casos penales, incluidas las previstas en el artículo 14 del Pacto, incluso si la detención se califica de administrativa con arreglo a la legislación nacional³³. El Grupo de Trabajo toma nota de que el Sr. Ameer estuvo en detención administrativa durante seis meses, el Sr. Amarneh estuvo en detención administrativa durante nueve meses y el Sr. Mohammad sigue en detención administrativa desde su detención el 28 de octubre de 2023.

98. El Grupo de Trabajo observa que las tres personas comparecieron ante un tribunal militar, que decretó su detención administrativa. En relación con la competencia de los tribunales militares, el Grupo de Trabajo siempre ha afirmado su opinión de que el enjuiciamiento de civiles por tribunales militares constituye una vulneración del Pacto y del derecho internacional consuetudinario y que, en virtud del derecho internacional, los tribunales militares solo pueden ser competentes para juzgar a personal militar por delitos de carácter militar³⁴. En el presente caso, el Gobierno no explicó, a pesar de haber tenido la oportunidad de hacerlo, las razones por las que estas tres personas comparecieron ante un tribunal militar. El Grupo de Trabajo no considera que los tribunales militares israelíes cumplan las normas de un tribunal independiente e imparcial a los efectos del examen de los casos relacionados con civiles. Además, recuerda que el artículo 14 del Pacto exige que el tribunal sea independiente e imparcial. A este respecto, en su jurisprudencia anterior el Grupo de Trabajo ya ha declarado que los tribunales militares de Israel que imponen este tipo de detención administrativa no cumplen este criterio³⁵. A la luz de la información disponible, el Grupo de Trabajo considera que los Sres. Amarneh, Ameer y Mohammad fueron privados del derecho a que su caso fuera juzgado con las debidas garantías por un tribunal competente, independiente e imparcial, como exigen el párrafo 1 del artículo 14 del Pacto y el artículo 10 de la Declaración Universal de Derechos Humanos.

99. Según la fuente, la detención del Sr. Ameer se basa en expedientes secretos a los que ni él ni su abogado tuvieron acceso. Según se informa, el 12 de noviembre de 2023 el Sr. Ameer compareció ante el tribunal militar israelí, no se presentaron pruebas de incitación y el fiscal militar se refirió a la existencia de un “expediente secreto”. El Grupo de Trabajo recuerda que toda persona privada de libertad tiene derecho a acceder a toda la documentación relacionada con su detención, incluida la información que pueda ayudar a la persona detenida a argumentar que su detención no es legal o que los motivos para su detención ya no existen³⁶. Sin embargo, ese derecho no es absoluto, y cabe imponer restricciones a la divulgación de información si son proporcionadas y necesarias para perseguir un objetivo legítimo, como la protección de la seguridad nacional, y si el Estado ha logrado demostrar que con medidas menos restrictivas no se podría lograr el mismo resultado, por ejemplo, con la presentación de resúmenes de información en los que se señale claramente el fundamento de hecho de la detención³⁷. El Gobierno no ha proporcionado una

³² A/HRC/37/42, párr. 21.

³³ Véanse las opiniones núms. 31/2017, 73/2018, 12/2020 y 49/2020.

³⁴ A/HRC/27/48, párrs. 66 a 71. Véanse también las opiniones núms. 44/2016, 30/2017, 28/2018, 32/2018, 66/2019 y 68/2022.

³⁵ Opiniones núm. 15/2016, párrs. 25 a 27; y núm. 24/2016, párr. 21. Véanse también las opiniones núms. 3/2012 y 58/2012.

³⁶ Principios y Directrices Básicos de las Naciones Unidas sobre los Recursos y Procedimientos relacionados con el Derecho de Toda Persona Privada de Libertad a Recurrir ante un Tribunal, en particular el principio 12 y las directrices 11 y 13.

³⁷ *Ibid.*, directriz 13, párrs. 80 y 81.

explicación sobre la razón de que las pruebas contra el Sr. Ameer se hayan mantenido en secreto, ni ninguna justificación de por qué no se le pudo dar acceso a ellas. Por consiguiente, el Grupo de Trabajo considera que el hecho de no haber facilitado pleno acceso a las pruebas ha violado los derechos del Sr. Ameer a un juicio imparcial y a la igualdad de medios procesales amparados por el artículo 14, párrafos 1 y 3 b) y e), del Pacto y por los artículos 10 y 11, párrafo 1, de la Declaración Universal de Derechos Humanos³⁸.

100. El Grupo de Trabajo toma nota de las alegaciones no refutadas de la fuente de que estas tres personas no pudieron comunicarse con sus familias tras su detención y de que la comunicación con sus abogados se vio gravemente limitada. Al parecer, los Sres. Amarneh, Ameer y Mohammad no pudieron organizar o mantener comunicaciones privadas con sus abogados, y éstos solo pudieron concertar visitas cuando se aproximaba la celebración de una vista o cuando se planteaban problemas legales. Por ejemplo, el Sr. Mohammad no pudo recibir la visita de su abogado hasta el 21 de marzo de 2024 e, incluso entonces, fue difícil de organizar y las autoridades la retrasaron varias veces. El Sr. Ameer no pudo ver a su abogado hasta el 29 de noviembre de 2023 y solo una vez más el 25 de febrero de 2024. Además, según se informa, los Sres. Ameer y Mohammad fueron interrogados sin que sus abogados estuvieran presentes.

101. El Grupo de Trabajo recuerda que el acceso a un abogado es un derecho consagrado en el artículo 14, párrafo 3, del Pacto y en los principios 11, párrafo 2, 17 y 18 del Conjunto de Principios para la Protección de Todas las Personas Sometidas a Cualquier Forma de Detención o Prisión. Todas las personas privadas de libertad deben tener derecho a recibir asistencia letrada de un abogado de su elección sin demora y en todo momento durante su reclusión, en particular inmediatamente después de ser detenidas³⁹. El derecho a la asistencia letrada es un elemento esencial del derecho a un juicio imparcial, ya que sirve para garantizar que se respete debidamente el principio de igualdad de medios procesales. El Gobierno ha optado por no rebatir las alegaciones, en principio fiables, formuladas por la fuente, a pesar de haber tenido la oportunidad de hacerlo. Por lo tanto, el Grupo de Trabajo considera que se denegó a los Sres. Amarneh, Ameer y Mohammad el derecho a la asistencia letrada en vulneración del artículo 14, párrafo 3 b), del Pacto y en contravención del principio 18, párrafo 3, del Conjunto de Principios, la regla 61, párrafo 1, de las Reglas Mínimas de las Naciones Unidas para el Tratamiento de los Reclusos (Reglas Nelson Mandela), y el principio 9 y la directriz 8 de los Principios y Directrices Básicos de las Naciones Unidas sobre los Recursos y Procedimientos relacionados con el Derecho de Toda Persona Privada de Libertad a Recurrir ante un Tribunal.

102. Además, el Grupo de Trabajo recuerda que los derechos de las personas privadas de libertad a comunicarse con el mundo exterior y a recibir visitas de sus familiares son salvaguardias fundamentales contra cualquier intento de las autoridades de vulnerar sus derechos humanos, por ejemplo mediante la tortura u otros malos tratos y la desaparición forzada. El Comité de Derechos Humanos ha observado que se debe dar acceso sistemático y sin demora a los familiares, así como a personal médico independiente y abogados, como una de las salvaguardias que son esenciales para prevenir la tortura y para proteger de la reclusión arbitraria y de los atentados contra la seguridad personal⁴⁰. La denegación de los derechos a recibir visitas de sus familiares y a mantener correspondencia con ellos y a tener oportunidades adecuadas de comunicarse con el mundo exterior, con sujeción a las condiciones y restricciones razonables especificadas por ley o por reglamentos dictados conforme a derecho, es contraria a los principios 15 y 19 del Conjunto de Principios para la Protección de Todas las Personas Sometidas a Cualquier Forma de Detención o Prisión y a las reglas 43, párrafo 3, y 58, párrafo 1, de las Reglas Nelson Mandela.

103. Sobre la base de lo anterior, el Grupo de Trabajo considera que la detención de estas tres personas es arbitraria y se enmarca en la categoría III.

³⁸ Opiniones núms. 50/2014, párr. 77; 89/2017, párr. 56; 18/2018, párr. 53; y 78/2018, párrs. 78 y 79.

³⁹ Principios y Directrices Básicos de las Naciones Unidas sobre Recursos y Procedimientos relacionados con el Derecho de Toda Persona Privada de Libertad a Recurrir ante un Tribunal, principio 9 y directriz 8; Comité de Derechos Humanos, observación general núm. 35 (2014), párr. 35; [A/HRC/27/47](#), para. 13; [A/HRC/45/16](#), párrs. 50 a 55; y [A/HRC/48/55](#), párr. 56.

⁴⁰ Comité de Derechos Humanos, Observación general núm. 35 (2014), párr. 58.

d) Categoría V

104. La fuente afirma que la detención y posterior reclusión de los tres periodistas constituyen discriminación por motivo de su origen nacional, étnico o social como palestinos. Según la fuente, el Gobierno de Israel aplica dos sistemas jurídicos distintos y desiguales en el mismo territorio: mientras que la legislación militar israelí otorga a los tribunales militares autoridad para juzgar a cualquier persona que se encuentre en la Ribera Occidental y tenga 12 años o más, los ciudadanos judíos que residen dentro de los límites de la Ribera Occidental están sujetos al marco jurídico civil israelí.

105. El Grupo de Trabajo ha observado previamente que la práctica de la detención administrativa al amparo de la Orden Militar núm. 1651 está dirigida en particular contra los palestinos⁴¹. Durante toda la ocupación de la Ribera Occidental por Israel, la inmensa mayoría de las personas reclusas en detención administrativa han sido palestinas. Ante la falta de explicaciones del Gobierno en el presente caso, el Grupo de Trabajo toma nota de la tendencia desvelada por los casos que se le han presentado y que comprenden hechos similares⁴², así como del modo generalizado en que las órdenes de detención administrativa se aplicaron en esos casos contra los palestinos en particular, una práctica que también ha sido subrayada por el Comité de Derechos Humanos⁴³ y el Comité para la Eliminación de la Discriminación Racial⁴⁴. El Grupo de Trabajo concluye que la detención y la reclusión de los Sres. Amarneh, Ameer y Mohammad se llevaron a cabo por motivos discriminatorios concretamente su origen nacional, étnico y social como palestinos. El Grupo de Trabajo remite el presente caso a la Relatora Especial sobre la situación de los derechos humanos en los territorios palestinos ocupados desde 1967.

106. Además, la fuente afirma que las tres personas fueron detenidas y privadas de libertad por sus opiniones políticas y que su detención se enmarca en un contexto más amplio de uso de la detención administrativa de periodistas desde el 7 de octubre de 2023. El Gobierno no ha rebatido las alegaciones de la fuente, a pesar de haber tenido la oportunidad de hacerlo. El Grupo de Trabajo también señala que, en febrero de 2024, numerosos relatores especiales expresaron su grave preocupación por el hecho de que decenas de periodistas palestinos han sido detenidos por las fuerzas israelíes tanto en Gaza como en la Ribera Occidental, donde el acoso, la intimidación y los ataques a periodistas han aumentado desde los atentados del 7 de octubre⁴⁵.

107. El Grupo de Trabajo señala que cuando la privación de libertad ha obedecido al ejercicio activo de derechos civiles y políticos, hay una fundada presunción de que esta constituye también una vulneración del derecho internacional en razón de una discriminación basada en opiniones políticas o de otra índole. Como se concluyó en el análisis de la categoría II, la privación de libertad de estas tres personas fue el resultado del ejercicio pacífico de sus derechos fundamentales garantizados por el derecho internacional. Por lo tanto, el Grupo de Trabajo considera que su detención estuvo motivada por sus opiniones políticas, que son críticas con el Gobierno y sus políticas.

108. Por lo tanto, el Grupo de Trabajo considera que los tres periodistas palestinos fueron privados de su libertad por motivos discriminatorios basados en su origen nacional, étnico y social y en sus opiniones políticas. Su privación de libertad entrañó una vulneración de los artículos 2 y 7 de la Declaración Universal de Derechos Humanos, así como del artículo 2, párrafo 1, y el artículo 26 del Pacto, y se inscribe en la categoría V de la detención arbitraria.

e) Observaciones finales

109. Al Grupo de Trabajo le preocupa la gravedad de las presuntas condiciones de detención y la tortura a la que fueron sometidas estas tres personas, que incluyeron palizas, la obligación de llevar ropa de invierno en verano y ropa de verano en invierno, y permanecer

⁴¹ Opiniones núm. 31/2017, párr. 35; y núm. 60/2023, párr. 72.

⁴² Véanse las opiniones núms. 13/2016, 24/2016, 3/2017, 44/2017, 86/2017, 34/2018, 4/2022 y 60/2023.

⁴³ CCPR/C/ISR/CO/4, párr. 10.

⁴⁴ CERD/C/ISR/CO/14-16, párr. 27.

⁴⁵ Véase <https://www.ohchr.org/en/press-releases/2024/02/gaza-un-experts-condemn-killing-and-silencing-journalists>.

esposadas durante largos períodos de tiempo, lo que hizo que se les hincharan las manos las manos. Además, al Grupo de Trabajo le preocupan las alegaciones no refutadas de la fuente sobre la escasa calidad y cantidad de la comida, y que el Sr. Ameer perdió 32 kg durante su detención. El Grupo de Trabajo recuerda al Gobierno las obligaciones que le incumben en virtud del artículo 10, párrafo 1, del Pacto y de las reglas 1, 24, 27 y 118 de las Reglas Nelson Mandela, que establecen que toda persona privada de libertad debe ser tratada humanamente y con el respeto debido a su dignidad inherente, lo que incluye poder gozar de los mismos estándares de atención sanitaria que estén disponibles en la comunidad exterior⁴⁶. Por otro lado, la regla 22 de las Reglas Nelson Mandela garantiza el derecho de todos los detenidos a recibir alimentación de buena calidad y a tener acceso a agua potable.

110. El Grupo de Trabajo reitera que agradecería tener la oportunidad de colaborar constructivamente con el Gobierno de Israel para abordar sus graves preocupaciones en relación con la privación arbitraria de libertad⁴⁷. El 7 de agosto de 2017, el Grupo de Trabajo envió una solicitud al Gobierno para realizar una visita al país. Espera recibir una respuesta positiva del Gobierno como muestra de su voluntad de mejorar su cooperación con los procedimientos especiales de las Naciones Unidas.

3. Decisión

111. En vista de lo anterior, el Grupo de Trabajo emite la siguiente opinión:

La privación de libertad de Moath Amarneh, Abu Iram Ameer y Badr Mohammad es arbitraria, por cuanto contraviene los artículos 2, 7, 8, 9, 10, 11 y 19 de la Declaración Universal de Derechos Humanos y los artículos 2, 9, 14, 19 y 26 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, y se inscribe en las categorías I, II, III y V.

112. El Grupo de Trabajo pide al Gobierno de Israel que adopte las medidas necesarias para remediar la situación de los Sres. Amarneh, Ameer and Mohammad sin dilación y ponerla en conformidad con las normas internacionales pertinentes sobre la detención, incluidas las dispuestas en la Declaración Universal de Derechos Humanos y el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos.

113. El Grupo de Trabajo considera que, teniendo en cuenta todas las circunstancias del caso, la solución adecuada sería poner en libertad inmediatamente al Sr. Mohammad y concederle a él y a los Sres. Amarneh y Ameer, en relación con sus detenciones administrativas entre el 16 de octubre de 2023 y el 9 de julio de 2024, y el 5 de noviembre de 2023 y el 2 de mayo de 2024, respectivamente, el derecho efectivo a obtener una indemnización y otros tipos de reparación, de conformidad con el derecho internacional.

114. El Grupo de Trabajo insta al Gobierno a que lleve a cabo una investigación exhaustiva e independiente de las circunstancias en torno a la privación arbitraria de libertad de los Sres. Amarneh, Ameer y Mohammad y adopte las medidas pertinentes contra los responsables de la violación de sus derechos.

115. De conformidad con el párrafo 33 a) de sus métodos de trabajo, el Grupo de Trabajo remite el presente caso a la Relatora Especial sobre la situación de los derechos humanos en los territorios palestinos ocupados desde 1967 para que tome las medidas correspondientes.

116. El Grupo de Trabajo solicita al Gobierno que difunda la presente opinión por todos los medios disponibles y lo más ampliamente posible.

⁴⁶ Opinión núm. 26/2017, párr. 66.

⁴⁷ Véanse las opiniones núms. 3/2017, 31/2017 y 44/2017.

4. Procedimiento de seguimiento

117. De conformidad con el párrafo 20 de sus métodos de trabajo, el Grupo de Trabajo solicita a la fuente y al Gobierno que le proporcionen información sobre las medidas de seguimiento adoptadas respecto de las recomendaciones formuladas en la presente opinión, en particular:

- a) Si se ha puesto en libertad al Sr. Mohammad y, de ser así, en qué fecha;
- b) Si se han concedido indemnizaciones u otras reparaciones a los Sres. Amarneh, Ameer y Mohammad;
- c) Si se ha investigado la violación de los derechos de los Sres. Amarneh, Ameer y Mohammad y, de ser así, el resultado de la investigación;
- d) Si se han aprobado enmiendas legislativas o se han realizado modificaciones en la práctica para armonizar las leyes y las prácticas de Israel con sus obligaciones internacionales de conformidad con la presente opinión;
- e) Si se ha adoptado alguna otra medida para aplicar la presente opinión.

118. Se invita al Gobierno a que informe al Grupo de Trabajo de las dificultades que pueda haber encontrado en la aplicación de las recomendaciones formuladas en la presente opinión y a que le indique si necesita asistencia técnica adicional, por ejemplo, mediante una visita del Grupo de Trabajo.

119. El Grupo de Trabajo solicita a la fuente y al Gobierno que proporcionen la información mencionada en un plazo de seis meses a partir de la fecha de transmisión de la presente opinión. No obstante, el Grupo de Trabajo se reserva el derecho de emprender su propio seguimiento de la opinión si se señalan a su atención nuevos motivos de preocupación en relación con el caso. Este procedimiento de seguimiento permitirá al Grupo de Trabajo mantener informado al Consejo de Derechos Humanos acerca de los progresos realizados para aplicar sus recomendaciones, así como de todo caso en que no se haya hecho nada al respecto.

120. El Grupo de Trabajo recuerda que el Consejo de Derechos Humanos ha alentado a todos los Estados a que colaboren con el Grupo de Trabajo, y les ha pedido que tengan en cuenta sus opiniones y, de ser necesario, tomen las medidas apropiadas para remediar la situación de las personas privadas arbitrariamente de libertad, y a que informen al Grupo de Trabajo de las medidas que hayan adoptado⁴⁸.

[Aprobada el 30 de agosto de 2024]

⁴⁸ Resolución 51/8 del Consejo de Derechos Humanos, párrs. 6 y 9.